



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO  
CIRCUITO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SINCELEJO  
JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE  
SINCELEJO**

---

---

Sincelejo, Sucre, enero veinte (20) de dos mil veintiuno (2021)

**Extinción de la pena por pena cumplida**

**Procesado: Sergio Luis Pestana Contreras**

**Injusto: Tráfico, Fabricación o Porte De Estupefacientes**

**Radicado interno No. 2019-00096 (radicado de origen No. 2018-00186)**

**ASUNTO A TRATAR**

Decidir la solicitud de libertad definitiva por pena cumplida, impetrada por el Asesor Jurídico del establecimiento carcelario a favor del señor **SERGIO LUIS PESTANA CONTRERAS**.

**1. ANTECEDENTES PROCESALES**

El señor **SERGIO LUIS PESTANA CONTRERAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.737472 expedida en Bogotá, Cundinamarca, está condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones del conocimiento de Sincelejo, Sucre, mediante sentencia adiada junio 18 de 2018 a la pena principal **DE DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN** e inhabilidad para el ejercicio de los derechos y funciones públicas, como autor responsable de la comisión de la conducta punible de **FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, concediéndole la prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la pena de prisión intramural, previa suscripción de acta de compromiso y pago de caución prendaria por valor de **SETENTA MIL PESOS (\$ 70.000) MCTE**, beneficio que perfeccionado el 1 de abril de 2019.

Mediante auto fechado 12 de marzo de 2019, este despacho avocó el conocimiento del presente proceso.

**2. CONSIDERACIONES**

El art. 1º de la Constitución Política consagra que nuestro país es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, esto último establecido como una norma rectora de la ley sustancial penal y un principio rector de la Ley 65 de 1993.

Ahora bien, el inciso 3 del art. 28 de la Constitución Política establece que en ningún caso podrá haber penas y medidas de seguridad imprescriptibles, disposición que se complementa con el art. 34 de referida norma constitucional que prohíbe la pena prisión perpetua.

La Corte Constitucional en sentencia T-276 de 2016, respecto a la libertad personal señaló lo siguiente:

*“(...) La libertad personal es un principio y un derecho fundante del Estado Social de Derecho cuya importancia se reconoce en diversas normas constitucionales: (i) en el Preámbulo de la Carta como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la Nación; (ii) en el artículo 2º se establece como fin esencial del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, asignando a las autoridades el deber de protegerlos; y (iii) en el artículo 28 se consagra expresamente que “Toda persona es libre” y contempla una serie de garantías que buscan asegurar el ejercicio legítimo del derecho y el adecuado control al abuso del poder, como el derecho a ser detenido por motivos previamente definidos por el legislador y en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente.”*

Esto es, la libertad proporciona una triple naturaleza jurídica, en el entendido en que al igual que la dignidad humana y la igualdad, la libertad tiene una naturaleza polivalente en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se trata de manera simultánea de un valor, un principio y, a su vez, muchos de sus ámbitos son reconocidos como derechos fundamentales plasmados en el texto constitucional.

De esta manera, dada la prescriptibilidad de las penas, debemos llegar a la inexorable conclusión de que las mismas se extinguen, poniendo fin a la obligación del condenado de cumplir la pena que la ley señala por la infracción cometida, disposición constitucional que se encuentra acorde con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad y, que por ende, hace parte de nuestro ordenamiento jurídico<sup>1</sup>.

Por su parte, el art. 3º del Código Penal, establece que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, señalando el art. 10 de la Ley

---

<sup>1</sup>La Declaración Universal de Derechos Humanos como documento jurídico internacional y reconocedor de los mismos, hace referencia a tal derecho en su artículo 3, indicando que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 numeral 1, expresa que “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”

65 de 1993, que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.

Respecto a este tópico, la Corte Constitucional en sentencia C-806 de 2002, M. P., Dra. Clara Inés Vargas Hernández, señaló lo siguiente:

*“(...) La pena cumple una función de prevención especial positiva, es decir, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.”*

El anterior concepto tiene como fin último que el interno logre resocializarse y reintegrarse a la colectividad por medio de la construcción de un nuevo proyecto de vida.

De otro lado, el art. 7A de la Ley 65 de 1993, adicionado por el art. 5° de la Ley 1709 de 2014, establece que los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria. El art. 88 del Código Penal consagra las causas de la extinción de la sanción penal en los siguientes términos:

**“Artículo 88. Extinción de la sanción penal.** *Son causas de extinción de la sanción penal:*

- 1. La muerte del condenado.*
- 2. El indulto.*
- 3. La amnistía impropia.*
- 4. La prescripción.*
- 5. La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias.*
- 6. La exención de punibilidad en los casos previstos en la ley.*
- 7. Las demás que señale la ley.”*

Tenemos que las causas de la extinción de la sanción penal son aquellas específicas circunstancias que acaecen después de cometida la infracción, anulando la ejecución de la pena o extinguiéndola en caso de que se den cualquiera de los anteriores causales, lo que trae como consecuencia que para el sujeto activo de la conducta punible desaparece la obligación de soportar y tolerar la pena impuesta.

Ahora que, si bien es cierto, dentro de las seis (6) primeras causas de extinción de la sanción penal no se encuentra señalada la concerniente a

la pena cumplida, resulta plausible y razonable que esta situación sea asumida como otra causal de extinción, habida cuenta que las consagradas en dicha disposición sustancial tiene los mismos efectos jurídicos, como son la de cesar el cumplimiento físico de la pena impuesta y el recobro la libertad en caso de que se encuentre restringida la misma, por lo que, de ampliarse la reclusión de quien cumpliera su sanción resultaría contraria a sus garantías constitucionales y legales, pudiéndose en consecuencia encuadrar esta situación en la última causal de dicha disposición, esto es, las demás que señale la Ley, que para el caso sería traer a colación el contenido del núm. 1º del art 317 de la Ley 906 de 2004, que consagra como una causal de libertad, cuando se hay cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.

### 3. CASO CONCRETO

Se observa en el caso de marras que al señor **SERGIO LUIS PESTANA CONTRERAS** el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Sincelejo, Sucre, con funciones de control de garantías, el 26 de enero de 2018 llevo a cabo audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, frente a esta última audiencia se le impuso prisión domiciliaria. El 18 de julio de 2018 el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Sincelejo, Sucre, encontró penalmente responsable al señor Sergio Luis Pestana Contreras de la comisión de la conducta punible **DE TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, condenándolo a la pena de **DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN**, concediéndole la prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la pena de prisión intramural, previa suscripción de acta de compromiso y pago de caución prendaria por valor de **SETENTA MIL PESOS (\$ 70.000) MCTE**, beneficio que fue perfeccionado el 01 de abril de 2019, consignado dicho dinero a órdenes del Centro de Servicios para los Juzgados Penales de esta ciudad, en la cuenta de depósitos judiciales que tiene esa oficina en el Banco Agrario de Colombia.

Ahora, encontramos que este condenado ha permanecido privado de su libertad desde el día 25 de enero de 2018 hasta la fecha de hoy (20 de enero de 2021), lo que nos indica que ha cumplido la totalidad de la pena impuesta, quien por demás habrá que señalarse que no incumplió ninguna de las obligaciones consagradas en el art. 38 del C.P. ni en el acta de compromiso para disfrutar del beneficio de la prisión domiciliaria que le fue concedida por el juzgado de conocimiento que lo condenó, puesto que no existe incidente alguno tendiente a la revocatoria de dicho mecanismo sustitutivo de la pena.

Líbrese la correspondiente boleta de libertad a su favor, por lo que se ordenará al EPMSC de Sincelejo a fin de que conceda la libertad inmediata de este condenado, haciéndole saber que solo podrá recobrar su libertad si no es requerido por otra autoridad judicial.

Como quiera que este condenado constituyó caución para gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, se ordenará LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN PRENDARÍA por valor de SETENTA MIL PESOS (\$ 70.000) mcte, consignados el día 01 de abril de 2019 a órdenes del Centro de Servicio para los Juzgados Penales de esta ciudad, en la cuenta de depósitos judiciales que tiene esa oficina en el Banco Agrario de Colombia. Oficiese para tal fin.

Notifíquese esta decisión al condenado, a su apoderado judicial, al Agente del Ministerio Público y al Establecimiento Carcelario de Sincelejo (Sucre).

Enviar por Secretaría las comunicaciones a las autoridades encargadas de llevar registros de anotaciones y antecedentes delictuales, para lo de su competencia.

Una vez ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Sincelejo para su archivo definitivo, oficina que de conformidad con lo señalado en el artículo séptimo del Acuerdo No. PSAA07-4326 del 26 de noviembre de 2007, desempeñará las funciones establecidas en el Acuerdo No. 1856 de 2003 (que rediseñan las Oficinas Judiciales), siendo una de ellas, la señalada en el núm. 19 del art. 3o de dicho acto administrativo, de recibir de los despachos judiciales de su sede, debidamente organizados e inventariados, los expedientes con destino al archivo y hacer la entrega de ellos a dicha dependencia.

Conforme lo advierte el art. 176 del Código de Procedimiento Penal, en contra de la providencia proceden los recursos de reposición y apelación.

En mérito de lo brevemente expuesto, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** Declárese extinguida por pena cumplida a favor del PPL **SERGIO LUIS PESTANA CONTRERAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.732.472 expedida en Bogotá, Cundinamarca, la pena **DIEZ (10) MESES VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN** impuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, mediante providencia de fecha 18 de julio de 2018, toda vez que se ha cumplido la totalidad de la pena impuesta, tal y como se esbozó en la parte considerativa de esta providencia.

**SEGUNDO:** Líbrese la respectiva boleta de libertad a favor del PPL **SERGIO LUIS PESTANA CONTRERAS**, haciéndole saber al EPMSC de Sincelejo que el condenado solo podrá recobrar su libertad si no es requerido por otra autoridad judicial.

**TERCERO:** Ordenar la **DEVOLUCIÓN** a favor del señor **SERGIO LUIS PESTANA CONTRERAS**, la caución prendaaría por valor de **SETENTA MIL PESOS (\$ 70.000) MCTE**, consignados el 01 de abril de 2019 a órdenes del Centro de Servicio

para los Juzgados Penales de esta ciudad, en la cuenta de depósitos judiciales que tiene esa oficina en el Banco Agrario de Colombia. Oficiese para tal fin.

**CUARTO:** Enviar por Secretaría las comunicaciones a las autoridades encargadas de llevar registros de anotaciones y antecedentes delictuales, para lo de su competencia.

**QUINTO:** Notifíquese esta decisión al condenado, a su apoderado judicial, al Agente del Ministerio Público y al Establecimiento Carcelario de Sincelejo (Sucre).

**SEXTO:** Una vez ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales del Sincelejo para su archivo definitivo, oficina que de conformidad con lo señalado en el art. 7 del Acuerdo No. PSAA07-4326 del 26 de noviembre de 2007, desempeñará las funciones establecidas en el Acuerdo No. 1856 de 2003 (que rediseñan las Oficinas Judiciales), siendo una de ellas, la señalada en el núm. 19 del art. 3o de dicho acto administrativo, de recibir de los despachos judiciales de su sede, debidamente organizados e inventariados, los expedientes con destino al archivo y hacer la entrega de estos a dicha dependencia.

**SÉPTIMO:** Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**ARTURO GUZMAN BADEL**  
Juez